

# Responsabilidad Fiscal en Chile

**Roger Sepúlveda Carrasco**  
Rector Universidad Santo Tomás  
Región del Biobío



En los últimos años, Chile ha enfrentado desafíos significativos en términos de responsabilidad fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha destacado en su último informe que el estrés fiscal persiste y se proyecta que continúe en el mediano plazo. Este escenario es resultado de una política fiscal expansiva, iniciada durante la crisis financiera mundial subprime en 2008 y profundizada por la pandemia del COVID-19, que llevó a gastos extraordinarios sin una planificación adecuada para enfrentar sus consecuencias a largo plazo.

Para poner las cifras en contexto, el déficit fiscal de Chile alcanzó cifras récord en 2023, con un 24% del PIB y la deuda pública cerró el año 2024 en un 42,3% del PIB. Este déficit ha obligado al gobierno actual a realizar un ajuste de gasto de US\$ 1.500 millones, y se estima que la próxima administración deberá recortar US\$ 6.000 millones adicionales para equilibrar las finanzas públicas en el mediano plazo. Estos recortes son necesarios para retomar la senda de consolidación de las finanzas públicas y reducir las presiones sobre los precios y las tasas de interés de la economía. Cabe recordar que la inflación tiene un impacto significativamente importante en los sectores de menores ingresos. Cuando los precios de los bienes y servicios aumentan, las familias de bajos ingresos son las más afectadas porque una mayor proporción de sus ingresos se destina a necesidades básicas como alimentos y vivienda. Esto reduce su poder adquisitivo y puede llevar a un deterioro en su calidad de vida, ya que tienen menos recursos disponibles para otros gastos esenciales.

La Encuesta Casen 2022 revela que la pobreza mul-

tidimensional afecta a una proporción significativa de la población chilena. Las medidas de austeridad necesarias para reducir el déficit podrían traducirse en recortes en programas sociales esenciales, lo que agravaría aún más la situación de los más vulnerables. La reducción del gasto público en áreas como salud, educación y vivienda puede tener efectos devastadores en la calidad de vida de las personas que dependen de estos servicios.

Además, el aumento de la deuda pública, puede limitar la capacidad del gobierno para responder a futuras crisis económicas como la que actualmente se está incubando por la guerra arancelaria mundial. La falta de ahorros suficientes para enfrentar nuevos desafíos económicos podría llevar a un círculo vicioso de endeudamiento y recortes presupuestarios, afectando desproporcionadamente a las personas de menores ingresos.

En conclusión, la falta de responsabilidad fiscal de los gobiernos recientes -el gasto público ha superado los ingresos estructurales en 15 de los últimos 17 años- y el déficit presupuestario actual, tienen costos importantes que afectarían en el mediano plazo a las personas más pobres del país. Es crucial que se implementen políticas fiscales más prudentes, responsables y sostenibles en el tiempo para garantizar la estabilidad económica y proteger a los más vulnerables de los efectos adversos de la austeridad y de la inflación, de una forma que no sea la tradicional y fracasada receta populista de aumentar impuestos para redistribuir con fines electorales dichos recursos hasta que "el último apague luz", hipotecando con ello el desarrollo y calidad de vida de los Chilenos.